

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de única instancia instaurado por OCTAVIO MOSQUERA ÁLVAREZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05088-31-05-001-2018-00744-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, al abogado Santiago Gómez Gaviria, con tarjeta profesional # 342.104 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende el demandante se condene a Colpensiones al pago de los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, desde el disfrute de la pensión de vejez, con indexación y las costas del proceso.

Lo anterior, lo sustentó en que le fue reconocida la pensión de vejez mediante Resolución N° 17024 del 29 de noviembre del 2000. Se encuentra

casado con María Dora Montoya, asistiéndole el derecho al incremento pensional del 14%. El 05 de enero de 2015 solicitó a Colpensiones el reconocimiento de esa prestación sin recibir respuesta.

COLPENSIONES, dio respuesta a la demanda con oposición a las pretensiones. Admitió el reconocimiento de la prestación por vejez y afirmó no constarle las condiciones del matrimonio y la dependencia aludida. Propuso como excepciones de fondo las que denominó: Improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas y compensación y pago.

Por auto del 17 de julio de 2018 el Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, quien conoció del trámite judicial, declaró la falta de competencia por el factor territorial, con remisión del expediente a los Juzgados del Municipio de Bello - reparto- por ser el lugar donde se promovió la reclamación administrativa (fls. 44-45). El Juzgado Laboral del Circuito de Bello asumió conocimiento por providencia del 25 de febrero de 2020 (fl. 71) y en virtud del Acuerdo CSJANTA21-18 del 24 de febrero de 2021 se remitió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello por auto del 27 de julio de 2021 (fl.73).

Dicha autoridad judicial avocó el conocimiento del proceso y en sentencia del 109 de agosto de 2021, ABSOLVIÓ a la demandada de las pretensiones, por derogatoria orgánica de los incrementos pensionales que impusieron su desaparición del ordenamiento jurídico cuando entró en vigencia el Sistema General de Pensiones. Impuso costas procesales a cargo del demandante.

En vista que tal decisión fue proferida en un proceso de única instancia y resultó desfavorable al pensionado, conoce esta Sala del asunto en el grado jurisdiccional de consulta, conforme al mandato del artículo 69 del CPT y de la SS, y de la sentencia de la Corte Constitucional C-424 de 2015.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver lo que corresponde, importa resaltar en este asunto, que se encuentran por fuera de discusión los siguientes presupuestos fácticos: i) La pensión de vejez fue reconocida por Colpensiones a partir del 02 de agosto del 2000 bajo requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (fls. 6-7); ii) El 21 de abril de 1963, contrajo nupcias con María Dora Montoya Granada (fl.14); y iii) reclamó a la convocada a juicio, los incrementos pensionales por cónyuge a cargo, sin obrar respuesta alguna (fl. 12).

Con la claridad que brindan tales elementos, le corresponde a esta Corporación determinar, si proceden o no los incrementos pensionales regulados en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año.

Al respecto, esta Sala acoge las reflexiones de la Corte Constitucional sobre la vigencia de esa disposición, expuestas en la sentencia SU 140 de 2019, en la que luego de analizar cuáles elementos fueron incluidos en el sistema general de pensiones a través de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; la inclusión del principio de sostenibilidad financiera en la reforma constitucional anunciada en el Acto Legislativo 01 de 2005; y las razones del legislador para las reformas al sistema pensional desde la Ley 797 de 2003; concluyó que los beneficios del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, fueron derogados a partir del 1º de abril de 1994, y solo tienen vocación de prosperidad para aquellos pensionados que causaron ese derecho antes de la data en mención.

Interpretación que no pugna con los principios de favorabilidad e *in dubio pro operario*, pues como puso de presente el alto tribunal en la misma decisión referida: “ *en realidad, la duda hermenéutica que surge....o bien no*

existe o, al menos, es suficientemente débil como para no dar lugar a la aplicación del principio in dubio pro operario...ya que, en efecto, el art 21 del Acuerdo 049 de 1990...dejó de existir con ocasión de la derogatoria tácita que sobre este implicó la expedición de la Ley 100 de 1993....”.

Con base en esa intelección y descendiendo al caso concreto, se encuentra que Octavio Mosquera Álvarez causó la pensión de vejez desde agosto del 2000, esto es, luego de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones que derogó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, reglamento que no le resulta aplicable por no ser esta normativa a partir de la cual el actor cumplió los requisitos pensionales, por lo que al no tratarse de la disposición reguladora de su derecho ni de manera directa ni por transición, no podía ser titular de los incrementos pensionales solicitados, beneficio que por demás se encuentra derogado a partir del 1º de abril de 1994.

Por consiguiente, en virtud de estas breves consideraciones, se confirmará la decisión de primera instancia, pues se ajusta a derecho la absolución de las pretensiones, lo que comprende, por supuesto, lo relativo a la indexación, dado el principio lógico de que lo accesorio corre la suerte de lo principal.


Finalmente, sin costas en esta instancia, por haberse surtido en el asunto, el grado jurisdiccional de consulta.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia consultada, de fecha y procedencia conocidas. Sin costas en esta instancia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA
NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05088310500120180074401
Proceso:	Ordinario
Demandante:	OCTAVIO MOSQUERA ALVAREZ
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	19/08/2022
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario